

El Siglo de Torreón

com.mx

¿Cuánto cuesta votar?

El dispendio electoral se ha manifestado con estricta eficacia. Del IFE al INE, pasando por el Trife y las campañas, la democracia mexicana se prepara con un alto grado de abstencionismo, voto encarecido y un desfaldo de millones de pesos al erario público.

La normalidad como una especie de superpoder.

Helen Hatley

El escritor Carlos Montemayor (1947-2010) acostumbraba utilizar una escena de la película Toma el dinero y corre (Woody Allen, 1969) para explicar la situación social y política que se vive en la nación mexicana.

Según el autor de Las armas del alba los habitantes del país son los clientes de un banco involucrados en un ejercicio democrático para determinar cuál de las bandas criminales que coincidieron en el lugar debe asaltarlos. Al pueblo, decía el novelista, le toca decidir qué grupo de ladrones, qué grupo de políticos quieren que les robe sus derechos y pertenencias.

Los fallos de la democracia mexicana, sin embargo, no pasan por una falta de recursos para organizar los comicios en los que son electas las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los poderes federal y responsables de crear las leyes. El dinero no ha sido problema, incluso la creación hace más de dos décadas del Instituto Federal Electoral partió de la idea de que debía garantizarse la limpieza de los procesos a cualquier costo, o mejor dicho, sin escatimar el efectivo.

Tal consigna se ha cumplido a rajatabla. Para no ir más lejos cada voto emitido en la elección intermedia celebrada el pasado 7 de junio, tuvo un costo de 300 pesos con 48 centavos, el equivalente a 4.2 salarios mínimos.

Las cifras, sin embargo, adquieren su verdadera magnificencia cuando se devela que el costo de la democracia en 2015, sólo para los gastos de operación del organizador de la

elección, fue de 13 mil 217 millones de pesos, un tercio del presupuesto aprobado para la Universidad Nacional Autónoma de México para 2016, y un 35 por ciento de la deuda registrada por Coahuila al primer semestre del año pasado, por ejemplo.

EL LUJO DEL VOTO

En los últimos 18 años, el costo de las elecciones federales intermedias, esas para renovar la Cámara de Diputados, ha aumentado cerca del 270 por ciento, es decir, en 1997 costaron cinco mil 039 millones 300 mil pesos y en el año que acaba de finalizar, fueron 18 mil 572 millones 411 mil pesos, de los cuales cinco mil 825 millones 855 mil 850 pesos se destinaron solamente al rubro de servicios personales (pagos a funcionarios). Las cifras incluyen los gastos de operación del instituto electoral y el financiamiento para partidos políticos.

Las elecciones presidenciales en México no han sido la excepción. Un estudio comparativo realizado por México Evalúa muestra que en 2006 la estructura del gasto en las elecciones fue como sigue: El Instituto Federal Electoral recibió ocho mil 444 millones de pesos, los partidos políticos cinco mil 786 millones de pesos. Además hubo otros gastos por mil 429 millones de pesos, para un total de 15 mil 659 millones de pesos.

En 2012 al IFE le dieron 10 mil 661 millones de pesos, cinco mil 468 millones de pesos se fueron en prerrogativas directas para los partidos y en otros gastos se fueron dos mil 497 millones de pesos. Un total de 18 mil 626 millones de pesos para un incremento del 19 por ciento, en seis años.

El análisis Ubica a México entre un grupo de países que presentan una opacidad significativa, relevante, peculiar. La evaluación de modelos de rendición de cuentas, información disponible y los mecanismos para difundirla, empareja a la nación mexicana con países como Botswana, Gambia, Kenia y Namibia.

MÁS AL MORRAL

En el estudio en cuestión, México Evalúa también se pone a considerar prerrogativas indirectas como el uso de tiempos fiscales de radio y televisión que, en el caso de 2012, representan un gasto de 21 mil 622 millones de pesos. Así el costo total de salir a votar sumaría 40 mil 248 millones de pesos.

La asociación calcula que los minutos totales de tiempo en radio y televisión fueron 100 veces superiores comparados con los de 2006. En seis años los minutos electorales en medios se multiplicaron por 100 y pasaron de 146 mil 619 a 14 millones 774 mil 760

mientras los spots pasaron de 395 mil 052 a cinco millones 688 mil 283, es decir, se multiplicaron por 14.

Para los comicios intermedios de 2015 el voto iba a costar, según las estimaciones de las autoridades, 212 pesos por cada persona registrada en el padrón electoral. Sin embargo, apenas el 47.71 por ciento de los 83 millones 563 mil 190 ciudadanos registrados salió a marcar las papeletas y eso elevó el costo en un 41 por ciento.

En dicho proceso hubo elecciones en 17 estados y se eligieron dos mil 159 cargos de elección popular. El costo de cada voto duplicó al de las elecciones federales de 2012 (118.4 pesos) con una participación del 63.08 por ciento de un padrón de 79 millones 492 mil 286 electores.

El ente responsable de armar urnas y recuentos, un IFE transformado en Instituto Nacional Electoral, con los 18.5 mil millones de pesos que le fueron asignados, dispuso de un 45 por ciento más de recurso que en el antecedente intermedio inmediato, de 2009, año en que el Instituto Federal Electoral ejerció 12 mil 180 millones de pesos.

LA SOMBRA DE LOS RECURSOS

En la década de los noventa del siglo pasado se decidió que el financiamiento de las elecciones mexicanas debería ser preponderantemente público para evitar que el flujo de capital privado determinara los resultados. A ese temor fundado y nunca expulsado de la escena nacional se agregó la cuita de que las organizaciones criminales intervengan en la vida democrática del país, sospecha que no está fuera de lugar, como quedó evidenciado con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la desaparición de 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa al amparo de autoridades municipales que llegaron al poder merced a sus vínculos con una organización criminal.

Además, garantizar la limpieza de los comicios, tarea harto complicada, luce como un mero despropósito dada la proclividad de la clase política a incurrir en prácticas ilegales aunque electoralmente redituables.

Una lección magistral a ese respecto es la que ha dado el Partido Verde Ecologista de México.

En el curso electoral 2014-2015 el instituto creado por Jorge Emilio González fue acusado de reparto indiscriminado y excesivo de artículos (lentes graduados, tarjetas de descuento, calendarios, mochilas) para congraciarse con el electorado y de promoción ilegal (spots televisivos, anuncios en revistas, mensajes, banners, tuits de famosos y demás).

La aritmética simple le dio la razón a los ecologistas. Consiguieron 47 escaños en la Cámara de Diputados que se suman a los legisladores priistas para garantizar una mayoría en los asuntos promovidos por el bloque oficial.

El exvocero nacional de los ecologistas, Arturo Escobar fue acusado de distribuir 10 mil tarjetas Premium Platino (tarjetas de descuento que se pueden utilizar en más de nueve mil establecimientos) a cambio de votos.

La Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales derivó en la solicitud a un juez federal para girar una orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Prevención del Delito y Atención a Organizaciones Ciudadanas del gobierno federal. La orden, sin embargo, fue negada alegando que la Fepade no aportó elementos que demostraran el delito.

Al 11 de diciembre, una petición registrada en el portal changue.org para que se le quite el registro partidista al instituto ecologista acumuló 165 mil 678 firmas.

Las muestras de desprestigio, incluidas las internacionales, no parecen afectar al aliado del PRI en los últimos comicios. En febrero de 2009, el Partido Verde Europeo, que agrupa a 36 partidos de 32 países, rompió relaciones con los verdes mexicanos debido a su empeño en promover la vuelta de la pena de muerte para abatir los índices de criminalidad.

CORRUPCIÓN

El éxito de una formación política viciada no sería posible sin un contexto nacional que lo permita. En declaraciones a medios internacionales, el director de Transparencia Internacional (TI) en México, Eduardo Bohórquez, afirmó que cada año en territorio nacional se registran unos 200 millones de actos de corrupción con un costo de más de 20 mil millones de dólares al año (352 mil millones de pesos al tipo de cambio actual).

Según el Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional México se encuentra en el lugar 103 entre 175 países. Obtuvo 35 puntos de 100 posibles, empató con Bolivia, Níger, Moldavia . Su vecino del norte, Estados Unidos, sacó un 74 y se ubicó en la posición 17. La nación mexicana tiene menos de la mitad de los puntos obtenidos por Chile y Uruguay (73 cada uno). Brasil, un país cuya presidenta, Dilma Rousseff, atraviesa por un fuerte escándalo de corrupción, tiene ocho puntos más que el país gobernado por Enrique Peña Nieto.

Estimaciones del Banco Mundial arrojan que la corrupción le cuesta a México el nueve por ciento del Producto Interno Bruto cada año, es decir, dos puntos más que la fortuna de Carlos Slim. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado es menos optimista, ubica el impuesto a la corruptela en el 20 por ciento del PIB, la quinta parte de los bienes y servicios que producen los mexicanos.

José Ufaz, presidente de TI, dice a quien lo quiera escuchar que cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder y usan fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados.

COMÚN DENOMINADOR

México es considerado el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Mediciones del Banco Mundial le otorgan 39 de 100 puntos posibles en cuanto a indicadores de control de la corrupción y le asignan un lugar entre las naciones más corruptas, la casilla 127.

Según el Barómetro de las Américas 2014, México es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos. El Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project ubica a la nación mexicana junto a Pakistán, Afganistán, Liberia, Venezuela entre otros, en el lugar 79 entre 99 naciones en su indicador de control de la corrupción que mide la efectividad de las instituciones y las tradiciones para frenar las corruptelas.

México, señala María Amparo Casar, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, está dentro de las primeras 20 economías del mundo y dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos. También puntualiza que los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso.

La cifra negra -el porcentaje de delitos de peculado, soborno, tráfico de influencias, pagos irregulares, conflictos de interés, desvío de recursos, licitaciones amañadas y demás que son cometidos pero no castigados- es del 95 por ciento.

La autora del estudio Anatomía de la Corrupción (2015) pinta de cuerpo entero a la clase política mexicana con el siguiente enunciado: "Gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado". La corrupción,

con sus 200 millones de actos al año (547 mil 945 al día) es el pan de cada día de los mexicanos.

DEMOCRACIA CARA

El Instituto Federal Electoral se creó hace dos décadas y media con un presupuesto cercano a los 10 mil millones de pesos. El argumento detrás de tan generoso financiamiento fue que la democracia debía consolidarse a cualquier precio.

Y sí, el dispendio electoral se ha manifestado con estricta generosidad, como prueban dos datos. Entre 2007 y 2011 el IFE aumentó su burocracia en casi mil plazas pasando de ocho mil 490 a nueve mil 473 empleados. Además, entre 2000 y 2011, los partidos recibieron la suma de 51 mil millones de pesos, según un estudio de la organización México Evalúa. Los gastos de los institutos que buscan el voto, sin embargo, están lejos de una buena cuantificación. Los costos ocultos, la movilización de votantes, el costo de los mítines, los incentivos a votantes, se quedan en la categoría de la conjetura.

En 2016, aunque no hay elecciones federales, el INE planteó necesidades por 15 mil 473.8 millones de pesos. Los gastos operativos del instituto ascenderán a 11 mil 442 millones de pesos, una disminución de 16.8 por ciento respecto del presupuesto del ejercicio 2015.

Además, se pidieron tres mil 090 millones de pesos para proyectos. De ahí saldrán los recursos para que el INE haga de autoridad electoral en las 13 elecciones locales que se desarrollarán en 2016, 12 de ellas incluirán relevo en la gubernatura.

La autoridad federal se hará cargo de la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. También comenzará a andar el camino de la credencialización en el extranjero, con un costo de 114 millones de pesos, y la puesta en marcha del Servicio Profesional Electoral Nacional, que arrancará con fondos por 25 millones de pesos. Para los partidos políticos se pidieron cuatro mil 031 millones de pesos, 27 por ciento menos que en 2015.

PRESIDENTE CARO

Gestionar la democracia es una forma honesta y bien remunerada de ganarse la vida. El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, recibe un sueldo de 262 mil 634 pesos mensuales, tres millones 151 mil 608 pesos al año, o lo que es lo mismo 44 mil 958 salarios mínimos.

El puesto, además, ofrece los siguientes beneficios: prima vacacional equivalente, cuando menos, a cinco días de sueldo base y que se otorga por cada período vacacional (tiene dos autorizados de diez días hábiles cada uno) y un aguinaldo equivalente, cuando menos, a 40 días de su sueldo sin deducción alguna.

El cargo tiene un seguro de vida que garantiza una cobertura básica de 40 meses de percepción tabular bruta mensual.

La primera línea del INE no escatima el efectivo. Sus 11 consejeros tienen 134 asesores con salarios que van desde los 10 mil pesos hasta los 200 mil pesos mensuales.

En el documento INE/DEA/1747/2015, expedido el 4 de mayo del año pasado en respuesta a una solicitud de información, se adjuntó una relación con los nombres y sueldos.

Al jefe de asesores de la Presidencia del INE, Luis Emilio Giménez Cacho García, le fue asignado un salario bruto de 201 mil 753 pesos mensuales. El segundo lugar correspondió a Antonio Rico Ibarra, con 167 mil 080 pesos al mes. El podio se cierra con Laura Enríquez Rodríguez, con una remuneración de 75 mil 707 pesos mensuales.

Tan sólo estos tres sueldos implican un desembolso mensual de 444 mil 540 pesos, o cinco millones 334 mil 480 pesos al año, más de 76 mil 098 salarios mínimos.

En mayo pasado, el colaborador del portal Vértigo Político, Gustavo Pérez, difundió que Lorenzo Córdova tiene empleadas a 40 personas entre asesores, secretarías recepcionistas, auxiliares y choferes.

La plantilla para uso personal del Presidente del INE factura, según la información publicada, 2.21 millones de pesos al mes, más de 31 mil 526 salarios mínimos.

VOTO POR VOTO

Dos factores que inciden directamente en el costo del voto son las prácticas opacas en el uso de recursos y la desconfianza en el sistema político.

Otro es el escaso interés de la ciudadanía por participar, indiferencia que deriva en pérdidas y subutilización de la infraestructura electoral.

La Red de Administración y Costos de Elecciones (ACE), organismo que analiza las experiencias con la democracia en el mundo, observa que países con una tradición democrática, como Estados Unidos, presentan costos menores (entre uno y tres dólares

por elector), mientras que países con menor experiencia como Paraguay, Rusia o México, suelen tener costos superiores a los tres dólares.

En la singladura de la democracia cada tramo tiene un costo, pero los principales son el registro de electores, la delimitación de distritos electorales, la votación, el escrutinio y la transmisión de resultados, la resolución de disputas, la información y educación de los votantes, las campañas de partidos y candidatos, además de la supervisión por parte de representantes locales y observadores internacionales.

En los comicios celebrados en Kenia, el 4 de marzo del año pasado, eligieron como presidente a Uhuru Kenyatta, político acusado en la Corte Internacional de La Haya de perpetrar crímenes contra la humanidad. Cada voto en Kenia representó un desembolso de 29 dólares (510 pesos).

En las presidenciales de julio de 2012 en México el costo de cada voto fue tasado en 118.4 pesos (para obtener dicha cantidad se tomó en cuenta el gasto total en tareas para organización de la jornada, capacitación y elaboración de materiales electorales dividido entre el número de votantes que acudieron a las urnas) mientras que en las intermedias de 2015 se determinó que cada papeleta marcada salió a 300.48 pesos (para el cálculo de esa cifra, en cambio, se dividió el gasto de operación del INE entre los votantes efectivos).

En 2011, el Centro de Investigación y Docencia Económicas difundió un estudio que encendió la polémica al sostener que el gasto electoral en México, dados los incrementos registrados en las partidas asignadas al IFE, había sido en comicios recientes el más alto en América Latina, e incluso superior al de Estados Unidos.

MÁS PESOS EN LA BALANZA

Si en algo coinciden especialistas y organismos internacionales es en que determinar el costo de la democracia es prácticamente imposible. Allí donde hay elecciones, las cifras oficiales de gastos de campaña tiene poca correspondencia con la realidad y las fórmulas para estimar la cifra en negro (como las hay para conocer cuánto se gasta en narcotráfico o en el mercado de las armas) son pocas y poco fiables.

A propósito de las elecciones de junio de 2015, Forbes publicó un artículo sobre cuánto cuesta comprar un voto en México. Nada más para empezar, la publicación señaló que tan sólo un acto de apertura o cierre de campaña de un candidato a gobernador puede costar cerca de 20 millones de pesos. La cifra es rotunda si se considera que los topes de

campaña para las gubernaturas en juego oscilaban entre los 27 millones (Guerrero) y los 93 millones de pesos (Sonora).

Para un arranque o cierre de la actividad proselitista se consideran cuatro elementos básicos: la alimentación de los asistentes, el transporte de acarreados, los productos promocionales (gorras, playeras, saleros y demás) y el entretenimiento (casi siempre a cargo de grupos musicales).

El infaltable reparto de despensas puede llegar a costar hasta 800 pesos (Distrito Federal) mientras que en demarcaciones como Chiapas o Oaxaca supera apenas los 100 pesos. En esa vertiente también entra el reparto de vales de despensa con saldos de entre 500 y 600 pesos.

En el ámbito de la promoción mediante espectaculares el costo de un espacio se ubica entre dos mil 500 y 40 mil pesos mensuales dependiendo de la ubicación.

Otros desembolsos comunes, los apoyos a líderes de opinión, los padrinzgos, los apoyos sociales -como becas, medicinas y materiales de construcción- y los pagos a consultores de los candidatos en campaña son gastos que difícilmente salen a la luz.

COAHUILA Y DURANGO

Las dos entidades del norte del país no escapan al encarecimiento de la democracia. En los últimos tres procesos electorales en la entidad gobernada por Rubén Moreira el voto se ha disparado en un 75 por ciento.

La renovación del Congreso local en 2014 costó 291 millones 620 mil pesos y como apenas 39 de cada 100 electores salieron a marcar la papeleta el precio de cada sufragio se ubicó en los 362 pesos.

En 2013, con un gasto electoral de 259 millones 908 mil pesos y una participación del 54 por ciento, cada acto democrático libre y secreto salió en 245 pesos.

En 2011, la elección de gobernador se llevó 247 millones de pesos. Salieron a votar 61 de cada 100 coahuilenses con credencial, para una erogación de 207 pesos por boleta contada.

En Durango, el abstencionismo se erige como el principal factor para el encarecimiento del voto. En 2013, con una participación del 58.1 por ciento y un presupuesto electoral de 214 millones 071 mil pesos el costo de cada sufragio se ubicó en 311.32 pesos.

La entidad duranguense elegirá gobernador el próximo año, mientras que en Coahuila los comicios serán en 2017. Para los comicios de 2016, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango solicitó un presupuesto de 333 millones 946 mil pesos, cifra que incrementa en más de 92.7 millones el gasto electoral de 2010. El IEPC calculó necesidades por 104 millones de pesos para cubrir los sueldos temporales de 800 personas que intervendrán en la elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales.

JUSTICIA

En muchos cálculos del costo de la democracia no se incluye el de los tribunales que dirimen los procesos de elección cuando una fuerza política impugna los resultados.

La instancia que se encarga de dicha tarea en México es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También conocido como Trife, este órgano justiciero solicitó para 2016 un presupuesto de dos mil 656 millones de pesos. Para el calendario recientemente concluido le autorizaron tres mil 062 millones.

En la justificación de su solicitud presupuestal para 2016, el Trife expuso que la reducción de 497.3 millones de pesos obedece a su compromiso con la "racionalidad y austeridad que deben prevalecer en las finanzas del país".

En 2013 el tribunal erogó dos mil 145 millones y para 2014 sus recursos ascendieron a dos mil 488 millones de pesos. Los montos referidos dan un total de 10 mil 351 millones de pesos o más de 145.5 millones de salarios mínimos. En 2007, el Trife costaba mil 128 millones de pesos.

En unos meses se elegirán en territorio mexicano dos mil 300 cargos, suma de 12 gobernadores, 269 diputados de mayoría relativa y 167 de representación proporcional, además de mil 394 alcaldes y 391 presidentes de comunidad.

NORMALIDAD

Un hecho notable es que a pesar de la participación del crimen organizado en los comicios, los desvíos de recursos públicos, los gastos excesivos, la compra de votos, las muestras de parcialidad de las autoridades electorales, los asesinatos de candidatos y demás prácticas nocivas para la democracia, las jornadas de votación en México suelen ser calificadas como tranquilas y descritas como "sin sobresaltos" o "con incidentes menores".

Sin embargo, los resultados obtenidos en temas como el combate a la corrupción, a la inseguridad y a la pobreza en los últimos años arrojan la certeza de que el autor de *Las mujeres del alba* y *Guerra en el paraíso* no habría cambiado su postura acerca de la realidad política y social que se vive en el país.

Si combinamos las ideas principales de los párrafos anteriores, la inescrutable normalidad de las elecciones y el símil acuñado por Carlos Montemayor, un posible amasijo sería: El asalto se concretó sin sobresaltos, con incidentes menores según testimonios recogidos por el Ministerio Público Electoral y de Participación Ciudadana. La banda de los vencedores, con el 35 por ciento de la votación efectiva, se hizo con pertenencias y derechos valuados en 121 millones de personas. El 53 por ciento de los clientes se abstuvo de acudir al lugar. Los grupos perdedores presentaron recursos de nulidad que serán analizados y resueltos en un plazo no mayor de diez días por el Tribunal Nacional Electoral y de Valores.

La comparación, seguramente, no le haría mucha gracia a Virgil Starkwell, el genial ladrón de Toma el dinero y corre. Con lo digno que era.